Señores (as):

UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL MAGDALENA

E. S. D

Asunto: OBSERVACIONES A LA TERNA CANDIDATOS PARA CONTRALOR, Solicitud de Inadmisión y/o Exclusión de los aspirantes SAFUAT ATUNES CELEDON, ANDRES FELIPE FERGUSSON D'ACUNTI y RAFAEL CASTAÑEDA AMASTHA.

MARYORIS MARGARITA PEDRAZA ALVAREZ, domiciliada en la ciudad de Santa Marta (Magdalena), identificada con la cedula de ciudadanía número 36.694.589 expedida en la ciudad de Santa Marta (Magdalena), actuando en nombre propio, por medio del presente escrito, acudo ante sus honorables despachos, con el fin de presentar observaciones respecto a la terna y lista de elegibles presentada ante la Asamblea Departamental del Magdalena, para elegir al Contralor Departamental 2026-2029, además de presentar Solicitud de Inadmisión y/o Exclusión de aspirantes SAFUAT ATUNES CELEDON, ANDRES FELIPE FERGUSSON D'ACUNTI y RAFAEL CASTAÑEDA AMASTHA de la Convocatoria Pública para Proveer el Cargo de Contralor (A) Departamental del Magdalena para el periodo 2026-2029, de conformidad con lo estatuido en el artículo 7 de la Resolución 034 de 22 de julio de 2025: CAUSALES DE INADMISIÓN: "J) Estar incurso en alguna de las causales de Inhabilidad o Incompatibilidad o prohibición establecidas en la Ley" y CAUSALES DE EXCLUSIÓN: "ñ) Realizar acciones para cometer fraude en el proceso. o) Transgredir las disposiciones contenidas en el reglamento de aplicación de las etapas y pruebas del proceso"; de acuerdo a las siguientes:

I. CONSIDERACIONES

1. Como es del pleno conocimiento de ustedes, la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental del Magdalena, profirió la Resolución 034 del 22 de julio del 2025, "POR MEDIO DE LA CUAL SE APERTURA Y REGLAMENTALA CONVOCATORIA PUBLICA PARA PROVEER EL CARGO DE CONTRALOR (A) DEPARTAMENTAL DEL MAGDALENA PARA EL PERIODO 2026-2029".

2. Sea lo primero resaltar que se puede apreciar tanto en la terna definitiva como en el acto administrativo que apertura y reglamenta la convocatoria pública para proveer el cargo de Contralor Departamental del Magdalena, que nada se dice respecto de la protección del derecho humano de

igualdad de género, pese a que el artículo 272 de la Constitución Política, modificado por el Artículo 4 del Acto Legislativo 4 de 2019, señala:

“ARTÍCULO 272. < Artículo modificado por el Artículo 4 del Acto Legislativo 4 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías, corresponde a estas en forma concurrente con la Contraloría General de la República.

(...)

*Los Contralores departamentales, distritales y municipales serán elegidos por las Asambleas Departamentales, Concejos Municipales y Distritales, **de terna conformada por quienes obtengan los mayores puntajes en convocatoria pública conforme a la ley, siguiendo los principios de** transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y **equidad de género**, para un periodo de cuatro años que no podrá coincidir con el periodo del correspondiente gobernador y alcalde.”*

Al respecto la Corte Constitucional se ha pronunciado en diferentes oportunidades y ha resaltado que sin duda alguna es necesario proteger a la mujer para que acceda a los mismos derechos que los hombres, ya que a lo largo de la historia, incluso en el tiempo presente, aunque las mujeres superan en número a los hombres no pasa lo mismo al momento de acceder a un cargo o a un contrato de trabajo, ya que se prefiere a los hombres, incluso pretender señalar que se tiene un trato igual para ambos es violatorio del derecho humano a la igualdad de género, por cuanto se le trata igual a quienes no lo son, ya que precisamente se hacen las mismas exigencias tanto a hombres como a mujeres a sabiendas de que ellas no han tenido las mismas oportunidades y que su propia condición de mujer, que son quienes paren a sus hijos, quienes los cuidan la mayor parte del tiempo y quienes cargan en sus hombros con la necesidad de dedicación de tiempo a su familia, la hace diferente a la hora de computarle el tiempo laborado, y ojo que si bien el pronunciamiento de la Corte Constitucional en esas sentencias se refieren más que todo a temas de cotización de la seguridad social, no están ellos distantes a lo que significa la exigencia de los mismos tiempos de experiencia para contabilizar unos puntos a la hora de participar en una convocatoria como en este caso, que no se hizo una diferenciación entre la experiencia para hombres y mujeres para puntuar, sino que se pretende hablar de una igualdad material que en realidad no existe.

Es así que en la sentencia C-054 de 2024, la Corte Constitucional hace mención a varios de sus pronunciamientos, así:

“84. El principio de igualdad en materia laboral y pensional exige que, en la elaboración de las leyes, el Legislador tome en consideración “las marcadas desigualdades en las condiciones laborales de los miembros de uno y otro sexo, [que] tienen un impacto definitivo sobre sus posibilidades reales de acceso a la pensión de vejez”. En particular, conforme a los artículos 13.2, 43 y 48 de la Constitución, y en atención a la brecha de género que históricamente ha existido en el acceso a la pensión de vejez derivada de la discriminación en el mercado laboral, el legislador tiene el deber de adoptar medidas afirmativas en favor de las mujeres en materia pensional. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la desigualdad histórica de las mujeres implica que “el trato diferenciado favorable (...) pasa de ser permitido a ser obligado por la Constitución misma” .

...

Sentencia C-410 de 1994. La Corte examinó la constitucionalidad del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, el cual prevé que la edad mínima de pensión para las mujeres es inferior a la de los hombres. La Corte concluyó que esta diferencia de trato era compatible con el principio de igualdad, dado que constituía una acción afirmativa que, en virtud del artículo 13.2 de la Constitución, tenía por objeto corregir, remediar y compensar diferentes prácticas discriminatorias estructurales que dificultaban a las mujeres reunir las condiciones exigidas por la ley para tener derecho a la pensión de vejez¹. La Corte señaló que, de facto, las mujeres no tienen la misma posibilidad de realizar aportes al sistema de pensiones, pues se enfrentan a barreras sociales estructurales de acceso al mercado laboral y son objeto de la “segregación profesional que divide el mercado de trabajo”², la cual las relega a ocupaciones secundarias, informales y mal remuneradas. Así mismo, resaltó que asumen mayores obligaciones frente a las labores domésticas que los hombres y deben soportar cargas especiales derivadas del embarazo y la maternidad, las cuales no son retribuidas ni reconocidas por el sistema pensional y, además, implican interrupciones en los periodos de cotización. En tales términos, concluyó que las marcadas desigualdades en las condiciones laborales y sociales de las mujeres tienen un impacto definitivo sobre sus posibilidades reales de acceso a la pensión de vejez y, por lo tanto, justifican la adopción de un trato más beneficioso en materia pensional. Por lo tanto, declaró exequibles las disposiciones demandadas.

87. Sentencia C-197 de 2023. La Corte examinó la constitucionalidad el inciso 2º del numeral 2º del artículo 9º de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993. Esta disposición preveía que, para tener derecho a la pensión de vejez, los afiliados al RPM -mujeres y hombres- debían acreditar 1300 semanas de cotización. El demandante sostenía que el trato idéntico entre hombres y mujeres en cuanto al número mínimo de semanas de cotización vulneraba los derechos de las mujeres a la igualdad y seguridad social y a obtener una protección especial en el ámbito laboral y pensional (arts. 13, 43, 48 y 53 de la CP).

88. La Sala Plena consideró que “las censuras por violación del principio de igualdad pueden manifestarse de distintas formas. Algunas de ellas están

¹ Corte Constitucional, sentencia SU-440 de 2021.

² Corte Constitucional, sentencia C-410 de 1994.

relacionadas con la interacción de las normas con otras disposiciones del sistema normativo en el que están inmersas". En esa medida, señaló que "el análisis de constitucionalidad de las disposiciones a la luz del derecho a la igualdad material no puede ser neutro". Debe involucrar un estudio de las condiciones normativas y fácticas de aplicación de la norma. En especial cuando "la censura está soportada en los efectos negativos y discriminatorios que produce la aplicación de una norma para un grupo determinado". Bajo esa perspectiva, estableció que la norma demandada, al interactuar con el requisito de edad mínima en el régimen de prima media, generaba un déficit de protección constitucional para las mujeres. Este déficit de protección consistía en que "para que las mujeres puedan acceder a la pensión de vejez en condiciones dignas y equitativas, deben acreditar la misma densidad de cotizaciones que los hombres, pero en un periodo inferior".

Se aprecia en estos pronunciamientos que lo que pretende la Corte que, en procura del respeto al derecho a la Equidad de Género, se haga la debida protección a la mujer, que, si bien debe participar en un proceso, no sea medida de la misma manera que los hombres, por cuanto son diferentes y tiene una carga social distinta.

En esta convocatoria observamos que si desde el acto administrativo de convocatoria se hubiese protegido el derecho humano, fundamental y constitucional de Igualdad de género, hoy tendríamos una mujer en la terna, porque no se trató de que no hubiese mujeres capaces que se presentasen a la convocatoria, ya que observamos mujeres que superaron con excelentes puntajes la prueba de conocimiento, al igual que tiene puntajes máximos en formación profesional, pero a la hora de evaluar su experiencia profesional y experiencia docente, entonces fueron los hombres quienes aun con puntajes inferiores en formación profesional y en la prueba de conocimiento terminaron posicionándose por encima de las mujeres, y claro que tenía que ser así, ya que no hubo protección alguna para ella y se pretendió dar una igualdad material que a la postre termina siendo una verdadera desigualdad y desprotección para la mujer.

Para el caso concreto se puede apreciar como:

RAFAEL ENRIQUE CASTAÑEDA, con un puntaje en prueba de conocimiento de 77.5, pero con experiencia profesional de 100 puntos y experiencia docente de 10 puntos superó a MARYORIS PEDRAZA ALVAREZ, con un puntaje de prueba de conocimiento de 80 puntos, Formación profesional de 100, pero con experiencia profesional de 50 puntos y experiencia docente de 10.

Así también se puede apreciar de LUIS FERNANDO BUENO GONZALEZ, quien con un puntaje de prueba de conocimiento de 63.75 puntos, pero con experiencia profesional de 85 y experiencia docente de 30, también supero

a MARYORIS PEDRAZA quien obtuvo un puntaje de prueba de conocimiento de 80 puntos, pero con menores puntajes en experiencia profesional y experiencia docente.

Finalmente el resultado es que MARYORIS PEDRAZA ALVAREZ, siendo la mujer con mayor puntaje entre las mujeres que se presentaron y superaron la prueba, quedó por fuera de la terna, dejando la terna sin ninguna mujer, y no porque no sean capaces, y no tengan los méritos, sino porque hubo una discriminación material al momento de plantear las reglas, dándole un trato discriminatorio a todas las mujeres que se presentaron, especialmente a MARYORIS quien superó la prueba con un puntaje más elevado que el obtenido por el Dr. Castañeda, pero quien por experiencia profesional y terminó desplazándola del lugar de la terna que en realidad le correspondía.

Por otro lado, si bien existe el concepto 273671 de 2023, emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en el que manifiesta que no es exigible la integración de una mujer en la terna para que esta no sea violatoria, es importante que se lea completo el contexto en el que se expidió dicho concepto, por cuanto en ese caso específico ninguna de las mujeres superó la prueba de conocimiento que era un requisito eliminatorio, a diferencia del presente caso, en el que no solo fue superada la prueba de conocimiento por mujeres, sino que fue superada con calificación superior a dos de las personas que le anteceden en la lista, incluso tiene mayor formación profesional que otros dos candidatos que también le anteceden.

Ahora bien, cuando se trata de protección a derechos fundamentales constitucionales, no existe un término que limite su amparo, si no que una vez se observa que se omitió la debida protección por parte del ente convocante, entonces se proceda a tomar las medidas pertinentes, en procura de la defensa de dicho derecho.

Presento estas observaciones, con el propósito de que se hagan las correcciones y se ampare el derecho humano, fundamental y constitucional a la Igualdad de Género, corrigiendo la terna, dando el lugar a la mujer que le corresponde allí, en pro de la contribución a un país más igualitario y respetuoso de los derechos humanos protegidos por la ONU.

Con fundamento en lo anterior, solicito se realicen las respectivas correcciones, ajustando la convocatoria a la protección del derecho a la igualdad de género, y se integre la terna con una mujer meritoria, esto que MARYORIS PEDRAZA ALVAREZ integre la terna.

3. En estricto cumplimiento a lo ordenado en la Resolución 034 del 22 de julio del 2025, como ciudadana y participante de la convocatoria que nos atañe, en cuanto a las facultades que se me otorga para presentar observaciones frente a los aspirantes inscritos en la misma, es dable señalarles que los aspirantes **SAFUAT ATUNES CELEDON, ANDRES FELIPE FERGUSSON D'ACUNTI y RAFAEL CASTAÑEDA AMASTHA** se encuentran incurso en unas evidentes e incuestionables causales legales-administrativas de inadmisión y/o exclusión que les impiden continuar participando dentro de la convocatoria pública para proveer el cargo de contralor del Magdalena, para el periodo 2026-2029; las cuales procedo a detallar a continuación:

SAFUAT ATUNES CELEDON:

Si bien la Universidad de Medellín se pronunció respecto a la reclamación del candidato Safuat Atunes Celedón, teniendo en cuenta que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades hace parte de esas normas que se clasifican como de orden público e imperativo cumplimiento, es indiferente si ya hubo un pronunciamiento al respecto, si este pronunciamiento no se ajusta al contenido de la norma. Por tal motivo es indispensable que se estudie este punto a profundidad y se tome una decisión ajustada a derecho.

Las razones y fundamentos de derecho que expongo a continuación buscan demostrar que el señor Atunes se encuentra inhabilitado para ejercer el cargo de Contralor Departamental, así:

En Concepto 04611 de 2022, emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en el que señala:

“Es importante tener en cuenta que el Consejo de Estado³ ha considerado que la circunscripción se refiere a la división de un territorio para efectos de concretar derechos, adelantar funciones y competencias. De hecho, la circunscripción electoral es aquel territorio en donde debe realizarse una elección.

Del análisis efectuado por el Consejo de Estado, debe entenderse que la circunscripción departamental coincide con cada una de las municipales, esto es, el departamento en su conjunto es la circunscripción territorial, y desde luego en él se incluyen los municipios que lo conforman; en ese sentido, se colige que un departamento es el conjunto de municipios.

En este sentido y dando respuesta a su consulta, si el aspirante a contralor municipal ejerció como contralor departamental autoridad civil o administrativa en el respectivo municipio en el que aspira a ser elegido; es decir, si en el ejercicio de su empleo ejerció facultad nominadora, celebró contratos o convenios; ordenó gastos con cargo a fondos municipales; conferir comisiones, licencias no remuneradas, decretar vacaciones y suspenderlas, para trasladar horizontal o verticalmente los funcionarios subordinados; reconocer horas extras, vincular personal supernumerario o fijarle nueva sede al personal de planta; en el municipio en el que aspira a ser elegido contralor municipal, se encontrará inhabilitado.

Lo anterior con el fin de evitar la afectación grave de los principios de imparcialidad, transparencia y moralidad de la función pública que supone que, quienes siendo empleados públicos de los órganos de control territorial que hayan ejercido autoridad política, civil o administrativa, puedan simultáneamente ejercer su candidatura con la capacidad de influencia que le otorga la investidura y la respectiva autoridad en relación con la corporación encargada de hacer la correspondiente elección, rompiendo las condiciones de igualdad en la competencia por el acceso al cargo."

Se puede apreciar que, pese a que hace referencia a quienes aspiran a ser Contralores Municipales, llevándolo al ámbito Departamental, finalmente se quiere lo mismo, evitar una afectación grave a los principios de imparcialidad, transparencia y moralidad de la función pública, permitiendo que quienes como empleados públicos de alguna manera hayan tenido alguna influencia por su investidura en la respectiva corporación que lo elige, tal como lo observamos en el presente caso, en el que no solo se trata de que este candidato estuvo en un cargo del nivel ejecutivo del distrito en el que tuvo subordinados, poderes para reconocer horas extras, conferir comisiones entre otras, sino que también tuvo participación activa en temas departamentales.

En este concepto se aclara que no se trata solo de un tema de auto vigilancia de los actos en que pudo participar, sino además de un lugar privilegiado que puede hacer que se rompan los principios de imparcialidad, transparencia y moralidad pública al momento de su elección.

Es de conocimiento público que el señor SAFUAT ATUNES CELEDON en múltiples oportunidades ha sido designado por el propio Señor Alcalde Distrital de Santa Marta, como miembro de la Junta Directiva de la CENTRAL DE TRANSPORTES DE SANTA MARTA LTDA., para que lo representara en las reuniones que esa Junta celebró el día 18 de enero de 2024, 22 de marzo de 2024, 5 de febrero de 2025 y 27 de marzo de 2025; lo que implicó indubitadamente que el doctor ATUNES CELEDON ejerciera funciones administrativas como miembro de la referida Junta directiva en representación de la ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA.

En este orden de ideas, se hace imperativo precisar, resaltar y recordar que la CENTRAL DE TRANSPORTE DE SANTA MARTA es una entidad del nivel departamental, y por lo tanto se constituye en un sujeto de vigilancia y control de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL MAGDALENA, órgano de control fiscal al cual el señor SAFUAT ATUNES CELEDON hoy aspira a ocupar el cargo de CONTRALOR DEPARTAMENTAL; lo que sin lugar a duda alguna, se configuran en inhabilidades e impedimentos que conmina a la UNIVERSIDAD DE MEDELLIN y a la Mesa Directiva de la Duma Departamental, a adoptar una determinación conforme a derecho.

Como podemos observar clara e inequívocamente la delegación ejercida por el doctor ATUNES CELEDON como miembro de la Junta Directiva de la Central de Transportes de Santa Marta, en representación del Alcalde Distrital de Santa Marta, acarrea el cumplimiento de funciones de autoridad administrativa en la referida entidad, la cual iteramos, es sujeto de vigilancia y control de la CONTRALORIA

GENERAL DEL MAGDALENA, órgano de control fiscal donde el participante se encuentra concursando para el cargo de Contralor General Departamental.

ANDRES FELIPE FERGUSSON D'ACUNTI:

Para el caso del aspirante ANDRES FELIPE FERGUSSON D'ACUNTI, este se desempeña en la actualidad como Contralor Auxiliar para el Control Fiscal de la Contraloría General del Departamento del Magdalena, órgano de control al cual aspira dirigir como Contralor Departamental.

En el ejercicio del cargo de Contralor Auxiliar para el Control Fiscal de la Contraloría General del Departamento del Magdalena, el señor FERGUSSON D'ACUNTI, inició una auditoria financiera, de gestión y resultados a la empresa de servicios públicos de El Banco – Magdalena, vigencia 2024, y en ella vincula al actual Diputado EDAGAR JERONIMO ARIAS ORTIZ.

Posteriormente, el diputado EDGAR ARIAS, puso en conocimiento de las autoridades pertinentes, que una vez se instaló el proceso auditor, esto es abril de 2025, empezó a recibir mensajes por diferentes medios no formales donde se le indicaba que, dependiendo de su comportamiento de caras al proceso de elección del Contralor General del Magdalena, en esa misma medida se evaluaría si lo vinculaban o no al proceso auditor referenciado; indicando y recordando que el proceso de convocatoria pública que estaba próximo a iniciar y en el que luego se inscribiría como aspirante el señor ANDRES FELIPE FERGUSSON D'ACUNTI, Contralor Auxiliar para el Control Fiscal de la Contraloría General del Departamento del Magdalena, que investigaba fiscalmente al diputado ARIAS ORTIZ.

Así pues, mediante Acta No. 020, fechada 25 de junio de 2025, el comité técnico de auditores, del cual hace parte el señor ANDRES FELIPE FERGUSSON D'ACUNTI como Contralor Auxiliar para el Control Fiscal de la Contraloría General del Departamento del Magdalena, hoy inscrito como participante en la convocatoria para elección del Contralor Departamental del Magdalena, aprueban el informe preliminar de la auditoria referenciada, en el que se le endilgan unas observaciones de naturaleza fiscal, disciplinarias y penales al diputado EDGAR JERONIMO ARIAS ORTIZ.

El diputado EDAGAR JERONIMO ARIAS ORTIZ, presenta sus descargos al informe preliminar de auditoria ante el señor ALBERTO MARIO GARZON WILCHES como Contralor General del Departamento del Magdalena y ANDRES FELIPE FERGUSSON D'ACUNTI en su condición de Contralor Auxiliar para el Control Fiscal de la Contraloría General del Departamento del Magdalena y su equipo auditor, apuntándose que este último, para esas calendas, ya se encontraba inscrito como aspirante a la convocatoria para elección del Contralor Departamental del Magdalena, reglamentada en la Resolución 034 del 22 de julio de 2025.

Nótese que la Resolución No. 034 de 2025, expedida por la mesa directiva de la honorable Asamblea Departamental del Magdalena, por medio de la cual se

apertura y reglamenta la convocatoria pública para proveer el cargo de Contralor (A) Departamental del Magdalena para el periodo 2026 – 2029, es de fecha 22 de julio de 2025, posterior a la presentación de los descargos contra las observaciones establecidas en contra del diputado ARIAS ORTIZ por el órgano de control Departamental.

Al respecto, debemos rememorar que la publicación de la invitación y la convocatoria de acuerdo al cronograma establecido en la precitada Resolución, fue desde el 22 de julio al 06 de agosto de 2025, y que las inscripciones de aspirantes, se desarrollaron del 08 al 14 de agosto de 2025 según el mismo cronograma oficial.

El señor ANDRES FELIPE FERGUSSON D'ACUNTI Contralor Auxiliar para el Control Fiscal de la Contraloría General del Departamento del Magdalena, se inscribe como aspirante a dicho proceso conociendo de un proceso auditor donde el diputado EDGAR JERONIMO ARIAS ORTIZ, fue vinculado y además elevó observaciones en su contra como presunto responsable; incurriendo el doctor FERGUSSON D'ACUNTI en presuntas conductas penales y disciplinarias, toda vez que claramente se evidencia la existencia de un riesgo inminente por la condición del cargo que desempeña el señor FERGUSSON D'ACUNTI, que afecta notablemente el derecho a elegir por conflicto de intereses y enemistad manifiesta del diputado EDGAR JERONIMO ARIAS ORTIZ.

De acuerdo a lo anterior es importante señalar que el señor ANDRES FELIPE FERGUSSON D'ACUNTI y los demás funcionarios fueron denunciados por el diputado EDGAR ARIAS por haber presuntamente instrumentalizando políticamente este noble órgano de control, con el fin de un interés particular que lleve al señor FERGUSSON D'ACUNTI al máximo cargo de control fiscal en el Departamento y para ello no cabe duda que se logra por medio del derecho a elegir que tienen Constitucional y Legalmente los Diputados del Magdalena frente a este proceso.

Así pues, solo hasta el día 15 de agosto de 2025, un día después de terminar la fecha de inscripción para los aspirantes convocatoria pública para proveer el cargo de Contralor (A) Departamental del Magdalena para el periodo 2026 – 2029, el comité técnico a través de Acta No. 025 aprueba el informe definitivo y así lo hace constar en el mismo, sin embargo, no anexa dicha valoración con el informe definitivo de auditoría y aún seguía conociendo del proceso auditor el aspirante FERGUSSON D'ACUNTI.

De otra parte, llama muchísimo la atención que solo en el momento en que se notifica al diputado EDGAR ARIAS el informe definitivo de la auditoría financiera, de gestión y resultados, llevada a cabo en la empresa de servicios públicos de El Banco – Magdalena, en el que se le deja en firme hallazgo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria, es que se separa del conocimiento FERGUSSON D'ACUNTI y quien suscribe dicho informe es el señor ALAN RAMOS SALCEDO como Contralor Auxiliar para el Control Fiscal (E).

De todo lo denotado, se puede concluir por medio de toda duda razonable que el señor ANDRES FELIPE FERGUSSON D'ACUNTI, concursante en la convocatoria para elegir Contralor Departamental en el Magdalena, siempre mantuvo la competencia y el conocimiento de proceso auditor y más aún endilgó observaciones en contra del diputado actual EDAGAR JERONIMO ARIAS ORTIZ.

Es preciso también indicar que el señor ANDRES FELIPE FERGUSSON D'ACUNTI, conocía claramente la condición de EDGAR JERONIMO ARIAS ORTIZ como Diputado del Magdalena y que, al ser él candidato o participante en el concurso para elegir el Contralor Departamental, donde el Diputado en mención, tenía que votar, podría tener una ventaja por encima de los demás aspirantes, por lo que debió apartarse desde el inicio del proceso auditor que seguía en contra del diputado, no obstante, el no hacerlo le genera hoy un conflicto de intereses y enemistad manifiesta, por lo que indudablemente a la luz del artículo 7 de la Resolución 034 de 22 de julio de 2025 se debe decretar su exclusión de la convocatoria pública que nos incumbe, como en efecto se solicita por medio de la presente.

No debemos olvidar que en tratándose del Contralor Auxiliar para el Control Fiscal de la Contraloría Departamental del Magdalena, como sujeto con funciones de control fiscal sobre la Asamblea del Magdalena, tal posibilidad de influencia o presión sería directa sobre la mentada corporación administrativa a quien el inciso 4º del artículo 272 superior confió con la elección el nuevo contralor. Tan sólo piénsese en el poder de intimidación o permisividad con que el señor ANDRES FELIPE FERGUSSON D'ACUNTI como Contralor Auxiliar para el Control Fiscal de la Contraloría Departamental del Magdalena, estaría en la posibilidad de contar para favorecer su acceso a cualquier cargo que dependiera del funcionario bajo su control.

Por lo tanto, resulta a todas luces claro que el señor ANDRES FELIPE FERGUSSON D'ACUNTI quien se desempeña como auditor de la Contraloría del Magdalena, con funciones de control fiscal, está en la posibilidad de incidir ante la Asamblea Departamental, a través de la misma intimidación o permisividad que ejerciere sobre la contraloría con funciones de enjuiciar las conductas de tal corporación administrativa. Sería, en este caso, una influencia indirecta sobre la citada Asamblea, mediante el indebido uso de sus funciones de control sobre la entidad que controla las funciones de aquel.

Por otro lado, debemos reseñarles que el señor ANDRES FELIPE FERGUSSON D'ACUNTI, se encuentra inmerso en las causales de inhabilidades previstas en el artículo 272 de la Carta Magna, pues la inhabilidad para ser elegido contralor departamental derivada de haber ocupado un cargo público, se restringe exclusivamente al orden departamental, ya que resulta razonable que el ejercicio de un cargo departamental, como el que ostenta hoy en día el doctor FERGUSSON

D'ACUNTI, es decir el de Contralor Auxiliar para el Control Fiscal de la Contraloría General del Departamento del Magdalena, le impide acceder al cargo de Contralor Departamental, más aún si se tiene en cuenta que puede existir una influencia sobre el electorado al tratarse de una elección, evidenciándose además un beneficio que le permite al participante en mención, obtener ventaja sobre sus contendores; máxime cuando la Contraloría General del Departamento del Magdalena, ejerce competencia en materia fiscal sobre los Diputados; por lo que la inhabilidad señalada por la suscrita, se configura en el presente caso, pues como se ha explicado con anterioridad, se patentiza un supuesto fáctico que surge de la interpretación armónica del artículo 272 de la Constitución Política, consistente en que dicho cargo público haya sido ejercido en el mismo orden territorial departamental, mandato constitucional que no debió omitir u obviar la Universidad de Medellín al momento de realizar la verificación de los requisitos habilitantes, por cuanto este precepto se constituye en un obstáculo o limitante que le imposibilitaba al señor ANDRES FELIPE FERGUSSON D'ACUNTI ir más allá de lo contenido en el mismo.

En este sentido, la norma Constitucional establece que los contralores departamentales, distritales y municipales ejercerán en el ámbito de su jurisdicción las funciones atribuidas al Contralor General de la Nación y fija los requisitos y prohibiciones para el ejercicio del cargo de contralor departamental, distrital o municipal, dada la importancia del organismo de control en los respectivos entes territoriales y la responsabilidad que implica la vigilancia del correcto manejo y gestión de los bienes públicos, y que cada una de las contralorías de los diferentes órdenes debe ejercer dichas funciones, excepto en los municipios donde no existan contralorías, en donde el control fiscal corresponderá a la contraloría departamental respectiva; contemplándose y recordándose que la jurisprudencia enseña en este punto, que la finalidad de la norma objeto de estudio, fue la de impedir que funcionarios públicos de un determinado departamento, pudieran pasar a ser contralores de ese mismo departamento, teniendo que fiscalizar sus propios actos.

Como se puede ver prístinamente, la finalidad que buscaron tanto el Constituyente como el legislador, frente al asunto que nos atañe, fue la de evitar que quien estuviera en un cargo público por el hecho de resultar elegido contralor y el hecho de ejercerse control posterior, pudiera llegar a controlar sus propios actos tal como **se produce en este evento, al ostentar actualmente el señor FERGUSSON D'ACUNTI el cargo de Contralor Auxiliar para el Control Fiscal de la Contraloría del Magdalena.**

Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia SU566 de 2019 acotó y determinó:

“7.1. Los elementos de la inhabilidad por ocupación de cargos públicos

En relación con la inhabilidad por la ocupación de cargos públicos, a que se contrae el presente análisis, la cual tiene por objeto restringir el acceso al cargo de

contralor de personas que se han desempeñado como servidores públicos en organismos o entidades de la administración pública sometidos, por regla general, al control fiscal de su gestión, **debe señalarse que para que la inhabilidad se configure deben confluir tres elementos, a saber, el temporal, el jerárquico y el territorial en relación con los cuales caben las siguientes precisiones:**

a) Temporal. Hace referencia a la ocupación de un cargo público “en el último año”, esto es, en el año inmediatamente anterior a la elección.

b) Jerárquico. Hace referencia al nivel del cargo dentro de la estructura de la administración, de acuerdo con el grado de responsabilidad funcional ejercido, el cual deberá corresponder al nivel ejecutivo.

c) Territorial. Hace referencia al “orden departamental, distrital o municipal”, esto es, al nivel territorial de pertenencia del cargo ocupado, el cual debe corresponder, en principio, al del orden territorial de la Contraloría a la cual se aspira.

La causal requiere la concurrencia de los tres elementos, así que si faltare uno de ellos, no habría lugar a su configuración.” (Negritas y subrayas fuera de texto)

Más adelante en la misma Sentencia, se indica y recalca:

“(..)

Por todo ello, el elemento territorial de la inhabilidad prevista en el inciso octavo del artículo 272 de la Constitución debe entenderse referido a la ocupación de cargos públicos en la entidad territorial en la que se aspira a ejercer control fiscal, y no en otra u otras respecto de las cuales el contralor carece en absoluto de competencia. Esta inhabilidad cumple una finalidad razonable al excluir de la elección a los ciudadanos que desempeñan cargos con responsabilidades en la gestión fiscal del ente territorial que estará sujeto al control fiscal de la respectiva contraloría...” (Resaltos y marcas son nuestras)

Igualmente, la Corte Constitucional, ha establecido que la inhabilidad prevista para los Contralores en propiedad, también se predica de quienes vinieren fungiendo como auditores de las contralorías departamentales y municipales durante los doce (12) meses anteriores a la elección del nuevo contralor. En efecto, como el cargo de auditor de la contraloría corresponde al funcionario que –por virtud de la delegación o desconcentración de funciones que en él hiciera el Auditor General de la República para vigilar la gestión fiscal de la propia contraloría, este también estaría inhabilitado para ser elegido como contralor de la respectiva jurisdicción. Ciertamente, al margen de que el auditor del caso perteneciere al nivel central de la administración pública, su labor claramente se ejecutaría **en el nivel territorial**, con capacidad real para influir sobre los funcionarios de tal nivel.

Así las cosas, al aplicar estos criterios jurisprudenciales al asunto que nos convoca, surge ineludible e imprescindible colegir que la aludida inhabilidad recae sobre el doctor **FERGUSON D'ACUNTI al ejercer actualmente el cargo de Contralor Auxiliar para el Control Fiscal de la Contraloría del Magdalena**, ya que este empleo guarda estrecha relación con la gestión fiscal que ejerce la Contraloría del Magdalena; derivando ello innegablemente que la interpretación que se le ha dado a la inhabilidad consagrada en el artículo 272 de la Carta para contralores departamentales, distritales o municipales, se resume en que no puede ser contralor departamental quien en el último año haya ocupado cargo público del orden departamental, ni contralor distrital quien haya ocupado cargo público del orden distrital, ni contralor municipal quien haya ocupado cargo público del orden municipal, en el respectivo municipio, lo cual surge de una correcta lectura y del aspecto teleológico de la norma constitucional.

RAFAEL CASTAÑEDA AMASTHA:

Frente a este participante se debe acotar que igualmente se encuentra inhabilitado, por cuanto su señora cónyuge MARTHA PALACIOS actualmente se desempeña como Gerente de la ESE Centro de Salud Paz del Río, entidad prestadora de salud, que también es sujeto de vigilancia y control de la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL MAGDALENA, órgano de control fiscal al cual el señor CASTAÑEDA AMASTHA hoy aspira a ocupar el cargo de CONTRALOR DEPARTAMENTAL; lo que sin lugar a duda alguna, se configuran en inhabilidades e impedimentos que conmina a la UNIVERSIDAD DE MEDELLIN y a la Mesa Directiva de la Duma Departamental, a adoptar una determinación conforme a derecho.

Finalmente, no sobra traer a colación lo dispuesto por la Corte Constitucional en Sentencia C-147 de 1998, respecto a las inhabilidades para ser Contralor departamental, la cual señaló:

*“la razón para restringir el acceso al desempeño como contralor departamental, por haber ejercido el candidato funciones públicas con anterioridad a la postulación, en los órdenes territoriales mencionados y en el año inmediatamente anterior a la elección que efectúa la correspondiente asamblea departamental (C.P., art. 272), está dirigida a impedir el ingreso de personas que, de alguna forma, tuvieron la oportunidad, los medios y las prerrogativas propias del ejercicio de funciones públicas, para incidir en su favor en una elección o nominación posterior, con clara violación del principio de igualdad de condiciones entre los demás postulantes (C.P., art. 13), y en detrimento de la prestación eficaz, moral, imparcial y pública de la función administrativa (C.P., art. 209), así como neutralizar la posibilidad de que se produzca un autocontrol de la gestión fiscal realizada.
(...)”*

El anterior criterio jurisprudencial se aplica plenamente en el presente caso, pues si es legítimo que se inhabilite para ser contralor departamental a quienes se desempeñaron en el año anterior como servidores públicos del nivel departamental, por la injerencia que pueden tener en la elección y por la posibilidad de terminar controlando sus propias actuaciones precedentes.

En lo que tiene que ver con el trámite de impedimentos y recusaciones, tenemos que la Ley 1437 de 2011, señala frente a la figura lo siguiente:

“ARTÍCULO 11. CONFLICTOS DE INTERÉS Y CAUSALES DE IMPEDIMENTO Y RECUSACIÓN. Cuando el interés general propio de la función pública entre en conflicto con el interés particular y directo del servidor público, este deberá declararse impedido. Todo servidor público que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento por:

1. Tener interés particular y directo en la regulación, gestión, control o decisión del asunto, o tenerlo su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho.

2. Haber conocido del asunto, en oportunidad anterior, el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral precedente.

3. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes arriba indicados, curador o tutor de persona interesada en el asunto.

4. Ser alguno de los interesados en la actuación administrativa: representante, apoderado, dependiente, mandatario o administrador de los negocios del servidor público.

5. Existir litigio o controversia ante autoridades administrativas o jurisdiccionales entre el servidor, su cónyuge, compañero permanente, o alguno de sus parientes indicados en el numeral 1, y cualquiera de los interesados en la actuación, su representante o apoderado.

6. Haber formulado alguno de los interesados en la actuación, su representante o apoderado, denuncia penal contra el servidor, su cónyuge, compañero permanente, o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, antes de iniciarse la actuación administrativa; o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos a la actuación y que el denunciado se halle vinculado a la investigación penal.

7. Haber formulado el servidor, su cónyuge, compañero permanente o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, denuncia penal contra una de las personas interesadas en la actuación

administrativa o su representante o apoderado, o estar aquellos legitimados para intervenir como parte civil en el respectivo proceso penal.

8. Existir enemistad grave por hechos ajenos a la actuación administrativa, o amistad entrañable entre el servidor y alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa, su representante o apoderado.

9. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil, acreedor o deudor de alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa, su representante o apoderado, salvo cuando se trate de persona de derecho público, establecimiento de crédito o sociedad anónima.

10. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral anterior, socio de alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa o su representante o apoderado en sociedad de personas.

11. Haber dado el servidor consejo o concepto por fuera de la actuación administrativa sobre las cuestiones materia de la misma, o haber intervenido en esta como apoderado, Agente del Ministerio Público, perito o testigo. Sin embargo, no tendrán el carácter de concepto las referencias o explicaciones que el servidor público haga sobre el contenido de una decisión tomada por la administración.

12. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral 1, heredero o legatario de alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa.

13. Tener el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad o primero civil, decisión administrativa pendiente en que se controvierta la misma cuestión jurídica que él debe resolver.

14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular inscritas o integradas también por el interesado en el período electoral coincidente con la actuación administrativa o en alguno de los dos períodos anteriores.

15. Haber sido recomendado por el interesado en la actuación para llegar al cargo que ocupa el servidor público o haber sido señalado por este como referencia con el mismo fin.

16. Dentro del año anterior, haber tenido interés directo o haber actuado como representante, asesor, presidente, gerente, director, miembro de Junta Directiva o socio de gremio, sindicato, sociedad, asociación o grupo social o económico interesado en el asunto objeto de definición".

Como se observa el conflicto de Interés es una figura dispuesta para todo aquel que se encuentre ejerciendo una función pública, que en desarrollo de la misma, deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas; el cual sobreviene cuando el interés general entra en conflicto con el interés particular y directo del servidor público. Este puede ser anunciado tanto por el funcionario que directamente considere que el ejercicio de sus funciones puede acarrear un provecho particular, caso en el cual deberá declararse impedido, como por el particular que presente la recusación en contra del servidor.

Así las cosas, un servidor público deberá declararse impedido, cuando en relación a su ejercicio y función sobrevenga alguna causal de conflicto de intereses, igualmente cualquier persona podrá recusar a un servidor público que incurra en causal de conflicto de intereses, de acuerdo al procedimiento descrito por el Artículo 12 de la Ley 1437 de 2011.

Frente a la figura de conflicto de intereses, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con ponencia del Dr. Rafael E. Ostau De Lafont Planeta, en sentencia con Radicación núm.: 25000-23-15-000-2010-001610-01 del 17 de marzo de 2011, señaló:

“Según la jurisprudencia de esta Sala, el interés que genera el conflicto debe ser directo, es decir que la decisión debe redundar en beneficio del servidor público en forma inmediata, esto es, sin necesidad de que medien circunstancias o elementos externos a la misma; que se produzca un beneficio especial, particular y concreto en favor suyo, de su cónyuge o de un pariente; y que además no se manifieste el impedimento por esa situación personal o familiar en el trámite del asunto, tal como lo ha señalado la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, al pronunciarse de fondo en procesos de pérdida de investidura de los congresistas. Así, por ejemplo, en la sentencia de 20 de noviembre de 2001, exp. núm. IP-0130, Consejero Ponente, Dr. Germán Rodríguez Villamizar, la Sala señaló:

"Por consiguiente, el conflicto de interés se presenta cuando el congresista se ve afectado por alguna situación de orden moral o económico que le impide tomar parte en el trámite o decisión de algún asunto sometido a su consideración, de tal manera que rompería la imparcialidad e independencia para atender su propia conveniencia o beneficio personal, o el de su cónyuge o compañero permanente, el de sus socios, o el de sus parientes en los grados antes señalados"

Asimismo, se ha dicho que el aspecto deontológico de esa figura radica en que es deber de los referidos servidores públicos poner de manifiesto ante la corporación respectiva, las circunstancias que por razones económicas o morales pueden afectar su objetividad, imparcialidad o independencia frente al asunto oficial o institucional que les compete decidir. De suerte que la causal no se configura por el sólo hecho de encontrarse en una situación personal o familiar que puede ser directa y específicamente afectada por la respectiva decisión, sino por no manifestarla, a sabiendas de encontrarse en situación de impedimento para tomar parte en aquélla."

En consecuencia, luego de realizar el análisis de la normativa que rige las inhabilidades aplicables a quienes aspiran a ser elegidos como contralores departamentales, se concluye que a éstos se les aplican las establecidas en el Artículo 272 de la Constitución Política y las previstas en el Artículo 6 de la Ley 330 de 1996.

Como corolario, y en aras de la aplicación integral de los principios de transparencia, buen gobierno y lo reglado mediante la multiindicada convocatoria, se hace indispensable que sus prestigiosas entidades, procedan de conformidad y declaren la exclusión de los participantes: SAFUAT ATUNES CELEDON, ANDRES FELIPE FERGUSSON D'ACUNTI y RAFAEL CASTAÑEDA, al configurarse claramente varias causales de inhabilidades, impedimentos y conflicto de intereses.

II. PRETENSIONES

De acuerdo con las consideraciones expuestas por medio de la presente solicitud de exclusión, al marco Constitucional, legal y reglamentario del proceso para proveer el cargo de Contralor Departamental del Magdalena y la amplia aplicación a los principios de transparencia y buen gobierno, se solicita lo siguiente:

1. Sírvase ordenar a quien corresponda:

- 1.1 Se realicen las respectivas correcciones ajustando la convocatoria a la protección del derecho humano, fundamental y constitucional a la igualdad de género, y se integre la terna con una mujer meritoria, esto es con MARYORIS PEDRAZA ALVAREZ, para ello haganse las declaraciones y emítanse las ordenes respectivas.
- 1.2 Declarar la exclusión inmediata de los aspirantes SAFUAT ATUNES CELEDON, ANDRES FELIPE FERGUSSON D'ACUNTI y RAFAEL CASTAÑEDA AMASTHA de la CONVOCATORIA POR MEDIO DE LA CUAL SE APERTURA Y REGLAMENTALA CONVOCATORIA PUBLICA PARA PROVEER EL CARGO DE CONTRALOR (A) DEPARTAMENTALDEL MAGDALENA PARA EL PERIODO 2026-2029, reglada por la Resolución No. 034 del 22 de julio de 2025.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Artículos 123, 126 y 272 de la Constitución, modificado por el artículo 4º del Acto Legislativo 04 de 2019, al igual que los artículos 135, 139 y 275 de la Ley 1437 de 2011. Art. 29, de la Constitución Colombiana.

Artículos 267 y 268 de la Constitución Política de Colombia.

Acto Legislativo 04 de 2019.

Decreto 403 de 2020.

Ordenanza 162 de 2023 (reglamento interno de la Asamblea Departamental del Magdalena).

Resolución 034 del 22 de julio de 2025, proferida por la mesa directiva de la asamblea departamental del Magdalena y demás normas concordantes en la materia.

Sentencia C-566 DE 2019

Sentencia C-054 de 2024

IV. PRUEBAS

Téngase como pruebas las siguientes:

Documentales

- a. Copia Acta No 001 Junta directiva 18 de enero 2024
- b. Copia Resolución No. 019 de 17 de enero de 2024, por medio de la cual se hace una delegación al jefe de la oficina privada del Despacho de la Alcaldía Distrital de Santa Marta.
- c. Copia Acta de Reunión Junta de socios Extraordinaria 001 del 05 de febrero 2025
- d. Copia Resolución No. 029 de 04 de febrero de 2025, por medio de la cual se realiza una delegación al jefe de oficina del Despacho del Alcalde Distrital de Santa Marta
- e. Copia Acta de Reunión Junta Ordinaria de socios 002 del 27 de marzo de 2025
- f. Copia Asistencia Reunión Junta Ordinaria de socios 002 del 27 marzo 2025
- g. Copia de Resolución No. 1220 del 26 de marzo por medio de la cual se hace una delegación al jefe de la oficina privada del Despacho de la Alcaldía Distrital de Santa Marta.
- h. Copia Acta No 001 Junta Ordinaria de Socios 22 de marzo 2024
- i. Copia de Resolución No. 982 del 22 de marzo de 2024, marzo por medio de la cual se hace una delegación al jefe de la oficina privada del Despacho de la Alcaldía Distrital de Santa Marta.
- j. Actas y actos administrativos que dan cuenta de la participación y el desarrollo de las funciones con autoridad administrativa del señor SAFUAT ATUNES CELEDON.
- k. Informe preliminar y definitivo de la auditoria efectuada a la empresa de servicios públicos de El Banco donde se vinculó al diputado EDGAR ARIAS, proceso adelantado por ANDRES FELIPE FERGUSSON D'ACUNTI, actual Contralor Auxiliar para el Control Fiscal de la Contraloría General del Departamento del Magdalena.
- l. Soporte de envío de denuncias penales y disciplinarias por parte del diputado EDGAR ARIAS en contra del señor ANDRES FELIPE FERGUSSON D'ACUNTI, actual Contralor Auxiliar para el Control Fiscal de la Contraloría General del Departamento del Magdalena.

- m. Se oficie a la ESE Centro de Salud Paz del Rio, a través de sus correos institucionales epazdelrio@gmail.com y juridica@esepazdelrio-fundacion-magdalena.gov.co se sirvan certificar desde que periodo ejerce como Gerente la señora MARTHA PALACIOS.
- n. Se constate la calidad de cónyuges entre RAFAEL CASTAÑEDA AMASTHA Y MARTHA PALACIOS en el SIGEP.

De oficio

Las que el despacho considere conducentes, pertinentes y útiles para un mejor proveer.

V. NOTIFICACION

Se reciben al siguiente correo electrónico maryorispedraza@hotmail.com

De usted con mucho respeto,

MARYORIS PEDRAZA ALVAREZ
C.C. No. 36.694.589 de Santa Marta